

Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

**Visto:**

En autos RIT O-7303-2018, RUC N°1840143155-8, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se acogió la demanda interpuesta por don Walter Jonathan Yzara Angulo en contra de PYG Construcciones S.P.A., de Constructora Su KSA S.A. y de Inmobiliaria Chorrillos S.A. solo en cuanto se condena a estas últimas de manera solidaria al pago de la suma de \$11.880.000 por concepto de daño moral.

Frente a la referida sentencia, la demandada Constructora Su KSA S.A. interpuso recurso de nulidad fundado en las causales, deducidas en forma subsidiaria, de los artículos 478 e) b) y 477 del Código del Trabajo, por medio de las cuales, denunció, en lo que importa al presente arbitrio, infracción de ley, manifestando que a la empresa principal sólo se le puede condenar por actos propios y no en posición de garante; el que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha siete de agosto de dos mil veinte.

En relación con esta última decisión, la misma parte, dedujo recurso de unificación de jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo que previenen los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas disquisiciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia en contra de la cual se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o las sentencias que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que, conforme se expresa en el libelo impugnatorio, la materia de derecho objeto del juicio que se propone unificar se refiere a determinar en un accidente del trabajo, en lo concerniente a la responsabilidad del dueño de la obra o faena, que no es aplicable el artículo 183 B del Estatuto Laboral, sino que, el artículo 183 E del mismo cuerpo legal y el artículo 66 bis de la ley 16.744, debido a



que a la mandante se le debe condenar por hechos propios y no en condición de garante.

Argumenta que el fallo impugnado, en el punto referido, se aparta de la sana doctrina que contienen las sentencias que acompaña para su comparación, en las cuales, en la misma situación de hecho, se unificó jurisprudencia en el sentido de que el dueño de la obra o faena sólo es responsable por actos propios.

Así, para hacer procedente la unificación pretendida, acompañó dos sentencias dictadas por esta Corte en los antecedentes N° 9.858-2013 y N° 5.620-12 en ambas la sala resolvió que *“...no obstante, que los textos de los artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo establecen respecto del dueño de la obra una responsabilidad por garantía en relación con las obligaciones laborales y previsionales de dar que debe satisfacer el empleador respecto de sus trabajadores, erigiendo a aquél en responsable solidario o subsidiario según se hubiere cumplido o no con las exigencias previstas por la última norma citada -y acotadas estas obligaciones en la forma que explicitan esos textos-, lo cierto es que tratándose de un accidente del trabajo la ley reguló la situación imponiendo a la empresa principal (dueña de la obra) un deber de protección especial en el artículo 183-E del Código del ramo, deber que se expresa en similares términos a aquél que el artículo 184 impone al empleador contratista o subcontratista.”* Posteriormente determina que *“...la disposición en análisis establece la responsabilidad directa que recae sobre la empresa principal en el evento que incumpla el deber de cuidado que el mismo texto le impone, de modo tal que perseguir su responsabilidad por un accidente del trabajo supone determinar claramente la conducta que por acción u omisión de su parte configuró un incumplimiento de ese deber personal y directo, así como la relación entre esa conducta y los daños reclamados.”* Concluyendo que *“la sentencia impugnada por el recurso de nulidad, ha incurrido en infracción de ley al considerar que en la situación del demandante, es aplicable la norma del artículo 183-B del Código del ramo y no el artículo 183-E del mismo cuerpo legal, que dispone que la responsabilidad de la empresa principal en un accidente del trabajo sólo puede ser declarada en virtud de un incumplimiento de las obligaciones propias y particulares que la ley le ha impuesto sobre la materia y no como garante de las obligaciones que ha debido cumplir el empleador directo.”*



Conforme a lo anterior, solicita, en definitiva, se acoja el arbitrio impetrado, invalidando la sentencia impugnada, dictándose la pertinente de reemplazo que rechace la demanda en lo atinente a la parte que representa.

**Tercero:** Que, para definir el destino del recurso en análisis, se debe tener en consideración no sólo la materia específica propuesta, sino el contexto relativo a la cuestión central del juicio conforme la situación concreta en que se plantea y confrontarla con las particularidades de aquel en que se dictó la sentencia a comparar; pues, el cotejo que exige este medio de derecho estricto debe realizarse sobre una base fáctica análoga que haga posible un pronunciamiento de homologación conforme sus fines.

Cumplido lo anterior, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

**Cuarto:** Que, así las cosas, surge como conclusión evidente que, en la especie, no se configura la similitud necesaria entre el fallo impugnado y los dos de contraste que permita el ejercicio unificador pretendido.

En efecto, la parte recurrente fue condenada solidariamente con la demandada principal a indemnizar los perjuicios causados al demandante por un accidente del trabajo. Ello toda vez que, en la recurrida se estableció como hechos de la causa “...a) *que la máquina en la cual se desempeñaba el demandante al momento del accidente no contaba con las suficientes protecciones en sus partes móviles que habrían impedido el atrapamiento de la extremidad del trabajador afectado; y b) que la empresa empleadora del trabajador accidentado no cumplió con su deber de protección suficiente y eficaz como tampoco la demandada solidaria, empresa mandante, su deber de fiscalización a la demandada principal para informarse de las condiciones de seguridad y salud en las que se desempeñaba el actor en específico, razón por la cual las condena de manera solidaria.*” Lo que los condujo a concluir que “*en lo relativo a la responsabilidad solidaria a la cual fue condenada la recurrente, el artículo 183 B del Código del Trabajo, como se señaló, consagra una obligación particular y especial en materia de higiene y seguridad, imponiendo al dueño de la obra el deber de protección eficaz de la vida y salud de todos los trabajadores que se desempeñen*



*en su empresa, lo que dista de la antigua responsabilidad establecida en el artículo 64 del Código del Trabajo, ya no como garante del derecho de los trabajadores que debe ser tutelado por su empleador directo, sino por su propia conducta que ha contribuido al nacimiento del evento dañoso. Esta disposición debe ser comprendida en base a los principios sobre los cuales se sustenta el Derecho del Trabajo, especialmente el de proteger a la parte más débil, y que va más allá de la voluntad de las partes, o más allá de la expresión poco feliz de la recurrente, en la cual señala que su parte no está obligada a tomar todas las medidas de seguridad para proteger la vida de los dependientes que laboran en sus faenas, queriendo dejar a su arbitrio las medidas que son necesarias y las que no; pues, este deber de protección va mucho más allá de la discreción de quien otorga el trabajo por su carácter de norma de orden público, agregándose a la nómina de sujetos responsables de las referidas obligaciones a un deudor más de la seguridad del trabajador, que es dueño de la obra o faena.” Determinando que “... de lo dicho se sigue que existe en la especie pluralidad de deudores con el demandante, siendo el objeto debido, para aquellos, la indemnización del daño producido como consecuencia del accidente laboral de que se trata. Entonces el acreedor tiene dos deudores y hay solidaridad entre ellos, porque la ley lo que hace es establecer la responsabilidad directa del dueño de la obra, empresa o faena, de las obligaciones laborales que afecten al contratista (empleador), por cuanto lo que está en riesgo es la vida o la integridad física o psíquica del trabajador, es decir, por la superior entidad del bien jurídico que se propone proteger.”*

Estableciendo, en consecuencia, que la Constructora Su KSA S.A. concurría a la obligación por hechos propios.

**Quinto:** Que, en las sentencias cuyo contraste se pretende, parten de la premisa que el dueño de la obra sólo responde por hechos propios en el acto que se le imputa y lo eximen de responsabilidad cuando aquello no acontece. Así se indica claramente en los contrastes al expresar que “...se unifica la jurisprudencia en el sentido anotado en los motivos anteriores, esto es, que la empresa principal no es responsable solidaria sino directa en el cumplimiento de la obligación de seguridad en relación con los trabajadores que se desempeñen en sus obras o faenas.”

**Sexto:** Que, a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados precedentemente, tal exigencia no



aparece cumplida en la especie, toda vez que, en este proceso, la parte recurrente resulta obligada a concurrir al pago de la indemnización en atención a que se acreditó la ausencia de su deber de fiscalización, tanto en las instalaciones, como en los elementos utilizados por los trabajadores subcontratados, incumplimiento que unido a la falta de mecanismos de seguridad en la máquina en la que laboraba el actor condujo a la ocurrencia del hecho dañoso.

**Séptimo:** Que, en consecuencia, la controversia que se requiere unificar no es tal, por cuanto, queda de manifiesto que los fallos acompañados no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelven sobre la base de presupuestos fácticos diversos a aquéllos planteados y establecidos en la resolución aquí impugnada, no cumpliéndose con el requisito contemplado en el inciso 2° del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada solidaria Constructora Su KSA S.A. en contra de la sentencia de siete de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°104.456-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y las abogadas integrantes señoras Carolina Coppo D., y Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Simpertigue y la abogada integrante señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.





En Santiago, a trece de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

